

de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de Hacienda en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 9 de octubre de 1984.—P. D. (Orden de 14 de mayo de 1984), el Director general de Tributos, Francisco Javier Eiroa Villarnovo.

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

**943** *ORDEN de 23 de octubre de 1984 por la que se dispone la ejecución de sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación de Ingenieros Geógrafos contra el Real Decreto 830/1981, de 27 de marzo.*

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en 13 de diciembre de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación de Ingenieros Geógrafos, contra el Real Decreto 830/1981, de 27 de marzo, que promulga la Instrucción y Tarifas de la Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de Artistas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 y concordantes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución de la referida sentencia, de 13 de diciembre de 1983, en sus propios términos, cuya parte dispositiva, es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando las causas de inadmisibilidad propuestas por el Abogado del Estado del recurso jurisdiccional promovido por el Procurador señor García Martínez, en la representación que ostenta, declaramos haber lugar al mismo, y en consecuencia, declaramos nula la inclusión en las tarifas del Real Decreto número 830/1981, de 27 de marzo ("Boletín Oficial del Estado" de 13 de mayo), de las Profesiones de Ingeniero Topógrafo (grado superior), y la de Ingeniero Técnico Geógrafo (grado medio), correspondientes, respectivamente, a grupo 01. Subgrupo 02. Epígrafe 029, la primera, y grupo 01. Subgrupo 03. Epígrafe 038, la segunda, y consiguientemente, la resolución administrativa tácita denegatoria del recurso de reposición articulado contra dicha disposición general por escrito de 12 de junio de 1981.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 23 de octubre de 1984.

BOYER SALVADOR

Ilmo. Sr. Director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales.

**944** *ORDEN de 23 de octubre de 1984 por la que se dispone la ejecución de sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso de apelación interpuesto contra sentencia dictada por la Sala Segunda de la Audiencia Territorial de Barcelona, sobre liquidaciones provisionales y municipales sobre las cuotas del Impuesto Industrial, Licencia Fiscal, a «Seat», en la zona franca de Barcelona.*

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona en 2 de noviembre de 1981, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona, como demandante, frente al Tribunal Económico-Administrativo Central, como Administración demandada, habiendo comparecido también como parte demandada la «Sociedad Española de Automóviles de Turismo» (SEAT), sobre liquidaciones practicadas por la Administración de Tributos de la Delegación de Hacienda de Barcelona por el concepto de recargos provisionales y municipales sobre las cuotas del Impuesto Industrial, Licencia Fiscal, año 1977.

Y visto el testimonio del fallo de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en 12 de abril de 1983.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 y concordantes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios términos de la referida fallo del Tribunal Supremo, de 12 de abril de 1983, cuya parte dispositiva, es como sigue:

«Fallamos: Estimar el recurso de apelación interpuesto contra sentencia dictada por la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, en su recurso número 1.985 de 1980, con fecha 2 de noviembre de 1981, y en su consecuencia, revocamos la sentencia apelada, decla-

ramos nulo y sin efecto, por ser contrario a derecho, lo resuelto por el Tribunal Económico-Administrativo Central, en su expediente 242 de 1979, con fecha 21 de noviembre de 1979, y reconocemos al Ayuntamiento de Barcelona derecho a percibir el recargo legal sobre cuota de Licencia Fiscal del Impuesto Industrial, devengado durante el ejercicio de 1977 por la «Sociedad Española de Automóviles de Turismo, S. A.», en sus instalaciones industriales, ubicadas en la zona franca de la misma ciudad.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 23 de octubre de 1984.

BOYER SALVADOR

Ilmo. Sr. Director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales.

**945** *ORDEN de 23 de octubre de 1984 por la que se dispone la ejecución de sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso de apelación contra sentencia de la Audiencia Territorial de Oviedo, de fecha 21 de enero de 1983, referente a Licencia Fiscal del Impuesto Industrial.*

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en 14 de mayo de 1984, en el recurso contencioso-administrativo en grado de apelación contra la sentencia dictada con fecha 21 de enero de 1983, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Oviedo, sobre liquidación por Licencia Fiscal del Impuesto Industrial.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 y concordantes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, de 14 de mayo de 1984, cuya parte dispositiva, es como sigue:

«Fallamos: Desestimar el recurso extraordinario de apelación, interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Oviedo, con fecha 21 de enero de 1983, en su recurso número 357 de 1982, y fijamos como doctrina legal que la exención de Licencia Fiscal, reconocida a las Cajas de Ahorros Popular en el artículo 9.7 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Actividades y Beneficios Comerciales e Industriales, aprobado por Decreto 3313, de 29 de diciembre de 1966, no ha sido derogada por lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/1981, en concordancia con el artículo 23 del Real Decreto-ley 3/1981.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 23 de octubre de 1984.

BOYER SALVADOR

Ilmo. Sr. Director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales.

**946** *ORDEN de 23 de octubre de 1984 por la que se dispone la ejecución de sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Federación Nacional de Perfumistas y Drogueros de España, contra el Real Decreto 2678/1981, de 13 de noviembre, por el que se crean en las tarifas de Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales nuevos epígrafes y se modifican otros.*

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en Madrid a 24 de octubre de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Federación Nacional de Perfumistas y Drogueros de España, contra el Real Decreto 2678/1981, de 13 de noviembre, por el que se crean en las tarifas de Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales nuevos epígrafes para actividades no clasificadas y se modifican los de otras.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 y concordantes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia de 24 de octubre de 1983, cuya parte dispositiva, es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Federación Nacional de Perfumistas y Drogueros de España, contra el Real Decreto 2678/1981, de 13 de noviembre, y en especial contra el número 17 de su artículo 1.º y el número 11 de su artículo 2.º, así como contra la desesti-

mación por silencio administrativo del recurso de reposición formulado contra la anterior disposición, por ser los indicados Real Decreto y resolución tácita, conformes a derecho.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.  
Madrid, 23 de octubre de 1984.

BOYER SALVADOR

Ilmo. Sr. Director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales.

947

*ORDEN de 25 de octubre de 1984 por la que se dispone la ejecución de sentencia desestimatoria de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 18 de enero de 1984 en recurso interpuesto por «José Luis Ruiz Solaguren, S. A.», contra la sentencia dictada en 13 de noviembre de 1981 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio de 1970.*

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 18 de enero de 1984 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso contencioso-administrativo número 348/1978, interpuesto por «José Luis Ruiz Solaguren, S. A.», contra la sentencia dictada con fecha 13 de noviembre de 1981, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio de 1970;

Resultando que el citado Tribunal se ha pronunciado sobre la cuestión debatida en los términos que se expresan en la parte dispositiva;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105, 1. a), de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por «José Luis Ruiz Solaguren, S. A.», contra fallo del Tribunal Económico-Administrativo Central de 28 de febrero de 1978, dictado en recurso de alzada contra fallo del Provincial de Madrid, recaído en reclamación número 109/1973, sobre liquidación por el Impuesto de Sociedades, ejercicio de 1970, por ser tal resolución conforme con el ordenamiento jurídico, todo ello sin hacer expresa imposición de costas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 25 de octubre de 1984.—P. D., el Subsecretario de Economía y Hacienda, Miguel Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

948

*ORDEN de 19 de noviembre de 1984 por la que se dispone la ejecución de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictada con fecha 5 de junio de 1984 en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en 3 de mayo de 1984 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Las Palmas, recaída en el expediente de compatibilidad de don José Joaquín Mazorra Vázquez.*

Ilmo. Sr.: En el recurso de apelación interpuesto por el señor Abogado del Estado, en representación y defensa de la Administración General, contra sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Las Palmas, con fecha 3 de mayo de 1984, sobre compatibilidad del cargo de Abogado del Estado y ejercicio de la Abogacía, apareciendo como parte apelada don José Joaquín Mazorra Vázquez, se ha dictado sentencia, por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con fecha 5 de junio de 1984, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Que estimando el recurso de apelación promovido por la representación del Estado debemos revocar y revocamos la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria de 3 de mayo de 1984 y desestimando el recurso contencioso-administrativo promovido por don José Joaquín Mazorra Vázquez, debemos declarar y declaramos que en la resolución de la Inspección General del Ministerio de Economía y Hacienda de 5 de diciembre de 1983 no se vulnera el artículo 14 de la Constitución; con expresa imposición de costas al recurrente.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 19 de noviembre de 1984.—P. D., el Subsecretario de Economía y Hacienda, Miguel Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

949

*ORDEN de 19 de noviembre de 1984 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de Cáceres dictada con fecha 5 de octubre de 1984 en el recurso contencioso-administrativo número 82/1984, interpuesto contra la resolución de este Departamento por don Luis González Asensio.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 82 de 1984 promovido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Cáceres por don Luis González Asensio perteneciente al Cuerpo de Arquitectos Superiores, número de Registro de Personal A14HA161, contra la resolución de este Ministerio de 18 de enero de 1984, recaída en el expediente de compatibilidad número 26/1983, se ha dictado sentencia con fecha 5 de octubre de 1984, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso contencioso-administrativo número 82 de 1984, promovido por don Luis González Asensio, sobre limitaciones al ejercicio de la función pública con actividades complementarias privadas, procede declarar nula por no ajustada a derecho la Resolución del ilustrísimo señor Subsecretario de Economía y Hacienda de fecha 18 de enero de 1984, reconociendo la Sala al recurrente don Luis González Asensio el derecho a ejercer privadamente su profesión de Arquitecto fuera de las horas de trabajo de su puesto público en áreas desconexas con su función, y todo ello sin hacer expresión sobre las costas.»

En su virtud, este Ministerio de Economía y Hacienda, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de fecha 27 de diciembre de 1956.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Madrid, 19 de noviembre de 1984.—P. D., el Subsecretario de Economía y Hacienda, Miguel Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

950

*ORDEN de 19 de noviembre de 1984 por la que se dispone la ejecución de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, dictada con fecha 29 de mayo de 1984, en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en 30 de abril de 1984 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Zaragoza, recaída en el expediente de compatibilidad de don Guillermo Pombo Fernández.*

Ilmo. Sr.: En el recurso de apelación interpuesto por el señor Abogado del Estado, en representación y defensa de la Administración General, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Zaragoza con fecha 30 de abril de 1984, sobre Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, apareciendo como parte apelada don Guillermo Pombo Fernández, se ha dictado sentencia por la Sala Tercera del Tribunal Supremo con fecha 29 de mayo de 1984, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado, se revoca la sentencia dictada el día 30 de abril de 1984 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Zaragoza, y desestimamos el recurso contencioso-administrativo formulado por la representación de don Guillermo Pombo Fernández, contra la Resolución del Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de enero de 1984, la que declaramos que no vulnera los derechos fundamentales de la persona recogidos en los artículos de la Constitución mencionados en la demanda; con expresa condena en las costas de ambas instancias a la parte demandante.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Madrid, 19 de noviembre de 1984.—P. D., el Subsecretario de Economía y Hacienda, Miguel Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.